

2ª SESIÓN DE PRÓRROGA DEL 7 DE OCTUBRE DE 1895

(CONTINUACIÓN)

PRESIDENCIA DEL DOCTOR ALCOBENDAS

SUMARIO:—Asuntos entrados—Continúa la discusión pendiente sobre el dictamen de la comisión de hacienda en el proyecto de ley, en revisión, y en los presentados por varios diputados, relativos á la lotería de beneficencia. (Se aprueba)—Se suspende hasta la sesión del viernes próximo la consideración del dictamen de la comisión de negocios constitucionales y exteriores, en el proyecto de ley aprobando el tratado de amistad, comercio y navegación con el reino de Suecia y Noruega—Aprobación de los dictámenes de la comisión de peticiones: 1º, en las cuentas de gastos presentadas por la secretaría de la honorable cámara y 2º, en la petición del señor Angel Menchaca, pidiendo se le exonere de las multas que le fueron impuestas por faltas al contrato de publicación de las sesiones, en el período legislativo anterior—Consideración del dictamen de la comisión auxiliar de presupuesto en el proyecto de ley, en revisión, abriendo un crédito suplementario al departamento de justicia, culto é instrucción pública, por la suma de 41,542,50 pesos moneda nacional, para el pago de créditos pendientes contra dicho departamento.

DIPUTADOS PRESENTES — Abella, Acuña, Alcobendas, Alem, Alvarado, Amarilla, Amuchástegui, Avalos, Avellaneda, Balaguer, Barroetaveña, Berduc, Cabal, del Campillo, Cantón, Carol, Castellanos (A.), Castellanos (F.), Claros, Ceretti, Daract, Dávila, Demarchi, Demaria, Ferrari, Frías, Gálvez, García (J. A.), García (L.), García (T.), Garzón, Grané, Godoy, Gómez (F. M.), Gómez (J. R.), Gómez (I.), González (G.), Guñazú, Herrera, Irigoyen, Llobet, Luque, Martínez, Mantilla, Maurín, Mena, Moutier, Obligado, Ocampo, Otaño, Pacheco, Pérez, Pizarro, Quesada, Rodríguez Jurado, Saavedra Zavaleta, Soaje Solari, Tamayo, Torino, Torres, Tejedor, del Valle, Varela, Vieyra, Villanueva.

AUSENTES, CON LICENCIA—Ayarragaray, Uballes.

AUSENTES, CON AVISO—Almada, Chavarría, Cortés Funes, Fernández, Ferrer, Morel, Vila, Villamayor.

AUSENTES, SIN AVISO—Alvarez, Alurralde, González (J. V.), Ibáñez, Peña, Pinto, Ruiz, Ugarte.

sala de sesiones los señores diputados arriba anotados, el señor presidente declara reabierta la sesión siendo las 3 p. m.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

Buenos Aires, octubre de 1895.

Al honorable congreso de la nación.

El poder ejecutivo tiene el honor de remitir á vuestra honorabilidad el expediente iniciado por el gobierno de la provincia de Jujuy, quien solicita que el subsidio nacional que le acuerda el presupuesto vigente se mantenga subsistente para el ejercicio de 1896.

Dios guarde á vuestra honorabilidad.

JOSÉ E. URIBURU.
BENJAMÍN ZORRILLA.

(A la comisión de presupuesto).

DIPLOMAS

—En la capital de la República, á 7 de octubre de 1895, reunidos en su

Sr. Secretario Ovando—Han presentado sus diplomas, como diputados elec-

tos por el distrito electoral de la provincia de Entre Ríos, los señores doctores Samuel Parera Denis y Torcuato Gilbert.

Se han recibido también los antecedentes relativos á las mismas elecciones.

Sr. Presidente—A la comisión de poderes.

ORDEN DEL DIA

LOTERIA NACIONAL

Sr. Presidente—Se pasará á la orden del día.

Continúa la discusión pendiente sobre el artículo 11, propuesto por la comisión en la sesión anterior.

Sr. Secretario Ovando — «Artículo 11. Los infractores enumerados en los dos artículos anteriores quedan excluidos del beneficio acordado por el artículo 376 del código de procedimientos en lo criminal».

El artículo del código, á que se hace referencia, dice así:

«Cuando el hecho que motiva la prisión del procesado tenga solamente pena pecuniaria ó corporal cuyo máximo no exceda de dos años de prisión, ó una y otra conjuntamente, podrá decretarse su libertad provisoria siempre que ofrezca algunas de las cauciones autorizadas en el presente título».

Sr. Presidente — Como este artículo fué objeto de observación, se votará.

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

Formulé en la sesión anterior una crítica contra el artículo que propone la comisión.

Me fundaba para ello en que el código de instrucción criminal permite la excarcelación bajo fianza, respecto de todos los hechos que merecen una pena cuyo máximo no exceda de dos años de prisión ó multa, y aún prisión y multa conjuntamente.

Si esta es una disposición del código de procedimientos en lo criminal, general para todos los delitos, no se concibe cómo puedan quedar exceptuados de la prescripción sobre excarcelación bajo fianza los que vendan billetes de loterías prohibidas, en la capital y territorios nacionales, tanto más cuanto que esta infracción es mucho más leve bajo su faz

moral, y aún en el hecho mismo, que los demás delitos comunes respecto de los cuales se permite excarcelación bajo fianza.

Es sabido que la prisión preventiva tiene por objeto impedir que se perturbe el orden público por los delincuentes y asegurar la efectividad de la pena de los mismos; y todo esto quedaría asegurado, en este caso, con la fianza.

Estando, pues, garantidos con la fianza los objetivos de la prisión preventiva no hay ninguna razón que autorice la prohibición para que no puedan ser excarcelados los vendedores de billetes de loterías prohibidas.

Hacia notar á la honorable cámara que era tanto más inaceptable este artículo, cuanto por los siguientes del proyecto en discusión se confiere al jefe de policía facultades judiciales—que espero no admitirá la cámara, pero lo hago notar para el caso en que fueran admitidas—y esta prohibición vendría á aumentar el enorme poder judicial que se da al jefe de policía.

Por estas breves consideraciones, votaré en contra del artículo propuesto por la comisión.

Sr. Avellaneda—Pido la palabra.

La ley actual, señor presidente, establece la pena de seis meses de arresto para los infractores á que se refiere este artículo; y como esta pena ha sido ineficaz hasta ahora para evitar la introducción y venta de las loterías no autorizadas, por cuanto todos los infractores eran inmediatamente excarcelados bajo fianza, la comisión ha creído conveniente presentar este nuevo artículo con el objeto de llenar los propósitos de la ley, que son plausibles, porque no sólo tienden á evitar la defraudación que se hace á los establecimientos de beneficencia en el producto de la lotería, sino también contener las estafas que se hacen al público por medio de las loterías clandestinas.

De otro modo no se evitará nada; así lo han demostrado los hechos.

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

Para contestar con dos á las observaciones del señor presidente de la comisión de hacienda.

Si en la actualidad no se aplica la pena de seis meses de prisión, no sé cómo

existe la esperanza de que se prenda á los que incurran en la infracción de vender billetes de loterías no autorizadas.

Si hay desconfianza en la justicia correccional ó en los agentes de policía en cuanto á la aplicación de la pena que hoy existe, no sé cómo se viene á dar esta facultad, negando la excarcelación bajo fianza. Porque si los agentes de lotería tienen los medios y elementos para evitar la pena de los seis meses de arresto, los tendrán también para evitar la que se establezca por esta ley.

Sr. Presidente—Se votará el artículo propuesto por la comisión.

—Se vota y resulta negativa de 30 votos contra 24.

Sr. Avellaneda—Pido que se rectifique la votación.

—Rectificada la votación, resulta afirmativa de 26 votos contra 23.

Sr. Secretario Ovando—El artículo siguiente es nuevo, propuesto por la comisión: «Los infractores á la presente ley podrán ser denunciados por cualquier persona del pueblo, quien tendrá derecho á la mitad de la multa que se imponga á mérito de su denuncia.»

Sr. Balaguer—¿Bastará la simple denuncia para que se aplique la pena, ó se requiere que haya sido comprobada?

Sr. Avellaneda—Eso se comprende!

Dice que en el caso de aplicación de la multa, corresponderá la mitad al denunciante. Es claro que, si no se comprueba, no puede aplicarse la multa.

Sr. Varela—Pero la denuncia basta para llevar al individuo á la cárcel.

Sr. Balaguer—Es menester que lo diga el artículo: á mérito de su denuncia, *previamente comprobada*.

—Se vota el artículo propuesto por la comisión, y resulta negativa de 27 votos contra 24.

Sr. Garzón—Pido que se rectifique la votación.

—Rectificada la votación, resulta nuevamente negativa de 27 votos contra 24.

Sr. del Campillo—Ha habido una proposición, señor presidente: un agregado

propuesto por el señor diputado por San Juan.

Sr. Avellaneda—¿Cuál es la agregación que formula el señor diputado?

Sr. del Campillo—*Prevía comprobación*, lo que no dice el artículo, por más que el señor diputado miembro informante crea que así se entiende.

Sr. Avellaneda—La comisión acepta.

Sr. Presidente—Tenga la bondad el señor diputado de formular su proposición.

Sr. Balaguer—Yo había propuesto una agregación, pero el artículo ha sido rechazado.

Sr. Secretario Ovando—Ahora entra como artículo 13 el que lleva el número 11 en el proyecto: «Queda prohibido el expendio de billetes en las calles de la capital.»

Sr. Mantilla—Los billetes á que se refiere este artículo, que no se pueden vender en las calles ¿son los de la lotería autorizada?

Sr. Avellaneda—De todas.

Sr. Mantilla—¿Inclusos los de la lotería autorizada?

Sr. Avellaneda—Inclusos los de la autorizada.

Sr. Mantilla—Perfectamente.

—Se aprueba el artículo en discusión.

—Pasa, sin observación, el número 12 del proyecto.

—Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro del interior, doctor Benjamín Zorrilla.

—En discusión el artículo 13.

Sr. Abella—Pido que se vote, señor presidente.

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

El artículo 13, señor presidente, contiene una disposición de la mayor gravedad, que viene á derogar leyes de procedimientos judiciales, y á afectar garantías constitucionales de los habitantes de la capital y de los territorios federales.

Para que la honorable cámara se convenza de la gravedad del contenido de esta disposición, bastará recordar que por el código de instrucción criminal actual y por los antiguos decretos que rigen á la policía de la capital, el jefe de policía no puede sino aplicar hasta la pena de un mes de arresto, por infrac-

Octubre 7 de 1895.

CÁMARA DE DIPUTADOS

2ª Sesión de prórroga.

ciones leves, en caso de no abonarse multa.

La policía en Francia no tiene facultades sino para aplicar, como *máximum*, penas hasta de quince francos de multa ó de cinco días de prisión; y estas penas no son impuestas por los prefectos de policía, por los jefes de las fuerzas policiales, sino por los tribunales de policía, por los jueces de paz y por los *maires*.

Está de más decir que en Estados Unidos, en Inglaterra, en toda la Europa civilizada, no se confiere á la policía facultades judiciales.

En nuestro país no hay precedente de que los jefes de policía hayan tenido estas facultades enormes que acuerda el artículo 13º.

La misión de la policía se reduce á prevenir los delitos, á prevenir las faltas, poniendo inmediatamente á disposición de los jueces de instrucción á los delinquentes que hayan violado la ley.

El código de procedimientos en lo criminal fué sancionado antes de ser creada, en nuestra capital, la justicia de instrucción; y, según él, la policía no tiene más funciones que aprehender á los que encuentre en flagrante delito, ó á las personas sobre quienes pesen indicios graves y vehementes de haber cometido un crimen, poniéndolas, dice el código, inmediatamente á disposición del juez de instrucción.

Ante cualquier delito que se cometa en la capital, el primer deber que impone á la policía el código de instrucción criminal, es ponerlo en conocimiento del juez de instrucción. Van los jueces y se hacen cargo del proceso. La policía es meramente auxiliar de la justicia de instrucción.

¿Cómo podríamos reaccionar contra esta institución, que rige en todo el mundo civilizado, reduciendo á la policía á la verdadera misión que debe tener! ¿Cómo reaccionaríamos contra nuestras tradiciones, contra las leyes vigentes, dando al jefe de policía de la capital y de los territorios federales esta facultad enorme de aplicar, por sí y ante sí, penas de quinientos pesos de multa ó seis meses de arresto, ó una y otra cosa en caso de reincidencia, cuando no puede

aplicar sino hasta arrestos de treinta días, y por infracciones leves! ¡Sería dar por tierra con todas las garantías constitucionales que hoy sirven de amparo á los habitantes de la capital y de los territorios federales!

Acabo de leer una obra sobre la policía de París; y allí se sienta y se desarrolla este aforismo: que las atribuciones de los prefectos ó jefes de policía están en razón inversa de las garantías individuales: conforme aumentan las facultades acordadas á los jefes de policía, disminuyen las garantías á las libertades individuales.

Esta es una verdad, un aforismo que ha sido establecido, antes que por el señor Ives Guyot, cuya obra he estudiado, por el eminente Liebert, en Estados Unidos: no se puede conferir á las policías más facultad que la de velar por el orden y prevenir los delitos, todo sujeto á la judicatura.

Lieber dice, en otra parte de su famosa obra sobre el «Gobierno libre»: que siempre que se somete á los habitantes á proceso, por individuos que no tienen ni las responsabilidades, ni las cualidades, ni la autoridad de los jueces, está en peligro la libertad individual, la libertad de todos los habitantes, porque los prefectos, los jefes de policía, no tienen ni la competencia, ni la serenidad de espíritu, ni el hábito del ejercicio de la justicia, porque la misión policial es completamente distinta de la justicia de instrucción y de la justicia represiva.

El señor diputado Varela, me parece, en sesiones anteriores observó que por este proyecto de ley venían á ser privados, los habitantes de la capital y de los territorios federales, de una de las facultades más preciosas y fundamentales consignadas en nuestra constitución, y es aquella que dice que nadie puede ser penado sino en virtud de juicio fundado en ley.

Aquí no hay juicio, señor presidente! El jefe de policía no puede hacer juicio, ni proceso, porque no es juez; el jefe de policía no reúne las condiciones de juez, ni desempeña funciones de tal. Serían castigados los infractores de esta prohibición de vender billetes de loterías prohibidas, sin juicio, sin defensa, sin ser

oídos, violando abiertamente el texto fundamental de la constitución.

¡A qué abusos no se llegaría, si el congreso convirtiese en ley esta disposición!

Porque—fíjese la honorable cámara—aquí no se trata de aplicar las penas á los infractores de esta prohibición de vender billetes de loterías prohibidas; se trata de dar una facultad amplia, absoluta, sin control, al jefe de policía, quien so pretexto de que fueran sospechosos de vender billetes, de tener billetes ó extractos, podría allanar todos los domicilios, podría aprehender á todo el que se le antojara, podría procesarlo, podría castigarlo, y no habría juicio ni defensa, ni habría siquiera apelación, porque no se establece por este proyecto.

Creo que, en atención á estas consideraciones, la honorable cámara ha de negar su voto á este artículo.

Sr. Avellaneda—Pido la palabra.

Este artículo ha sido sancionado por el senado, y no ha sufrido modificación por parte de la comisión de hacienda.

La comisión lo ha aceptado porque cree que es el medio de aplicar oportuna y eficazmente las penas que se establecen para los vendedores de las loterías clandestinas. Debo confesar que no ha hecho un estudio detenido de este punto, creyendo más bien que no establecía nada nuevo, sino que ésta era la práctica establecida en cada caso de infracciones de este género, municipales ó policiales.

Sr. Claros—Pido la palabra.

Desearía que se leyera el artículo correspondiente de la ley vigente: el que habla de la autoridad que ha de aplicar estas penas.

Sr. Secretario Ovando—La ley vigente no dice nada al respecto.

Sr. Varela—Hay en este país jueces y código de procedimientos; por consiguiente, es á los jueces á quienes corresponde...

Sr. Presidente—Permítame. ¿Cuáles la indicación del señor diputado por Jujuy?

Sr. Claros—Me propongo pedir que se vote por partes, y en el caso de que la cámara no acepte la redacción de la comisión, establecer que intervengan los jueces correccionales.

Sr. Barroetaveña—Lo establece la ley. Por la naturaleza de las penas, corresponde...

Sr. Presidente—Tenga la bondad de no interrumpir, porque está el señor diputado fundando su indicación. Ya sabe los resultados que dan las interrupciones.

Sr. Barroetaveña—Lo iba á hacer reglamentariamente, señor presidente.

Sr. Claros—Por mi parte, permito al señor diputado la interrupción.

Sr. Barroetaveña—Con permiso del señor presidente.

Como soy abogado de este foro, puedo dar al señor diputado antecedentes que tal vez no conozca.

Por nuestro código de procedimientos, corresponde á los jueces de lo correccional aplicar las penas desde un mes de arresto hasta un año. De manera que esta pena corresponde aplicarla á los jueces correccionales.

Yo no concibo, ni puedo admitir, como diputado, que los jueces de lo correccional no apliquen las penas que les corresponde aplicar, ni cumplan con su deber. Si hubiera pruebas en contra, acusémoslos ante el senado.

Sr. Claros—Había olvidado esa disposición, así es que no insisto.

—Se vota el artículo propuesto por la comisión, y es rechazado.

—En discusión el artículo 14.

Sr. Torino—Pido la palabra.

No he votado por el despacho de la comisión; pero una vez que él ha sido aprobado en general por la cámara y se está tratando en particular, creo que debo contribuir, en la esfera de mi posibilidad, á que la ley salga lo más correcta.

En este sentido, é interpretando el alcance del pensamiento de la comisión, propondré una modificación que en nada altera ese pensamiento, aclarándolo tan solo.

«Los billetes tomados á los infractores (dice el artículo) serán decomisados y destruidos...» Y yo propongo agregar: «el mismo día de la secuestación.» Porque, de lo contrario, esto se presta á que algún empleado poco escrupuloso pueda decomisar los billetes y reservarse el derecho de destruirlos cuando se le an-

Octubre 7 de 1895.

CÁMARA DE DIPUTADOS

2ª Sesión de prórroga.

toje, tal vez después de hacerse la extracción de la lotería.

Sr. Avellaneda—La comisión acepta.

Sr. Torino—Además, quería proponer otro agregado, del mismo carácter del anterior: «haciéndose constar por acta levantada ante escribano público (dice el despacho) la lotería de que proceden...» y yo agregaría: «la fecha de su extracción y la serie y número del billete.»

Sr. Avellaneda—Es entendido; pero no está de más y puede ponerse.

Sr. Varela—Este artículo es en beneficio de las loterías clandestinas.

Sr. Presidente—Si no se pide que se vote el artículo tal como está en el despacho, se votará con las adiciones propuestas por el señor diputado por la capital.

—Se aprueba el artículo, con dichas adiciones

—En discusión el artículo 15.

Sr. Berduc—Pido la palabra.

Voy á proponer una modificación á este artículo, que espero que la comisión de hacienda aceptará, porque se trata de salvar conflictos que él traería seguramente á algunas provincias.

En efecto, me parece que tres provincias tienen acordadas loterías, por contratos, destinándose el producido de todas ellas á la instrucción primaria. Por lo menos, es esto lo que pasa en Entre Ríos, que tiene, por su constitución, un departamento de instrucción pública autónomo, que posee su renta propia, que percibe mensual ó anualmente, y que la ley destina al fomento de la instrucción pública. Así, para el año 1895 cuenta, entre sus recursos, con el producto de una lotería que contrató, y que durará hasta el 30 de Marzo de 1897, es decir, hasta de aquí un año y seis meses.

Destinándose por esta ley la parte que le toca de la lotería á la provincia de Entre Ríos, al sostenimiento de hospitales, en la práctica resultaría esto: irá á Entre Ríos la parte que le corresponde, para los hospitales, si la instrucción pública se priva de esos recursos, y no irá si el concejo no renuncia á esos recursos; porque nada tiene de común la instrucción pública de Entre Ríos con las sociedades de beneficencia.

De manera que, ó se priva á los hospitales de Entre Ríos de los beneficios de esta ley, ó se priva á la instrucción pública de los beneficios del contrato de lotería.

Como he dicho, el contrato que allí se ha celebrado con una empresa termina en marzo de 1897.

No creo que pueda haber inconveniente en salvar en una ley de esta naturaleza cualquier dificultad que ella pudiera traer. Y espero que así será entendido por los miembros de la comisión y los señores diputados, porque no quisiera que se llegara á entender que yo celebro la multiplicidad de las loterías. ¡No! He votado en contra de esta ley, votaré en contra de todas las que vengan, del mismo género.

Pero, repito, como esto puede traer un daño á una, dos ó tres provincias — la de San Luis se encuentra en igualdad de condiciones á la de Entre Ríos: ha celebrado un contrato por un tiempo determinado—yo propondría que se aceptara este artículo en los siguientes términos. «Las provincias que por medio de sus legislaturas ó municipalidades autoricen nuevas loterías, quedarán excluidas de los beneficios de esta ley.»

El artículo del proyecto establece que las provincias que tuvieran actualmente loterías autorizadas, dejarán de gozar de los beneficios de esta ley si seis meses después continúan jugándolas. Habiendo contratos existentes, que no se pueden rescindir sin grave perjuicio de la instrucción pública, por un lado, ó de los hospitales, por otro, propongo que la disposición se aplique solamente para las nuevas loterías que se establezcan, y, por consiguiente, para la prorrogación de las existentes.

Sr. Avellaneda—Pido la palabra.

El artículo 15 ha venido sancionado del senado, y la comisión no ha introducido ninguna modificación en él, porque, indudablemente, no es justo que gocen de los beneficios de esta ley las provincias que tengan rentas producidas por las loterías autorizadas por ellas mismas ó por las respectivas municipalidades.

En antesala, el señor diputado por San Luis, y ahora lo repite el señor diputado por Entre Ríos, me aseguró que en nin-

guna de las provincias del interior se vende un solo número de lotería; que, por consiguiente, no recibirán más renta estas provincias que tienen autorizadas loterías que las otras, por cuanto los actuales contratistas, perseguida la venta de esas loterías en la capital, se verán en la necesidad de rescindir el contrato, lo que presentará inconvenientes en la forma propuesta, por cuanto entonces los contratistas se creerán con derecho para exigir fuertes indemnizaciones á las provincias, que éstas tendrían que acordarles necesariamente, para no privarse del total de la renta asignada por esta ley, que actualmente es muy crecida, puesto que, entiendo, varía entre noventa y cien mil pesos anuales.

Creo que no hay inconveniente en aceptar las modificaciones que se proponen.

Sr. García (L.)—¿Cómo quedaría redactado el artículo?

Sr. Secretario Ovando—«Las provincias que por medio de su legislatura ó municipalidad autoricen nuevas loterías, quedarán excluidas de los beneficios de esta ley».

Sr. Berduc—Para aclarar mejor el pensamiento podría agregarse: «ó prorroguen los contratos existentes».

—Apoyado.

Sr. García (L.)—Podría establecerse también que aportarán al fondo común de la lotería el producido de lo que reciben por estos contratos...

Sr. Berduc—Tal vez, en rigurosa equidad, sería justo pedir á los hospitales de las provincias que tuvieran un contrato de lotería, que sacrificasen la cantidad que importa lo que recibe la instrucción pública, en beneficio de otras provincias.

Pero recuerdo al señor diputado que la equidad no es el fundamento en la distribución de los beneficios de esta lotería; no olvide que todas reciben lo mismo, cualesquiera que sean sus necesidades.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

Las observaciones que ha hecho el señor diputado por Tucumán son exactas, realmente; pero en lo que se refiere á las indemnizaciones que éstos contratistas pudieran exigir de los gobiernos, una vez

dictada esta ley tal como ha sido sancionada por el senado, por el hecho sólo de privarse aquí, en la capital, la venta de los billetes, cambiarán los papeles: los que tendrían que abonar indemnización para rescindir estos contratos, serían los proponentes, y de ninguna manera los gobiernos.

Ahora, las razones que ha dado el señor diputado por Entre Ríos son muy atendibles, porque tocan á causa que es simpática á todos y que interesa siempre al pueblo argentino: la causa de la educación pública.

Pero sería conveniente establecer claramente que los beneficios que se obtengan, tanto de las loterías provinciales como de la nacional, fueran limitados.

He oído decir á algunos señores diputados que diversos contratos terminan en marzo. Entonces, podría decirse: debiendo estas loterías terminar en marzo.

Sr. Berduc—El agregado que he propuesto: «ó prorrogasen los contratos existentes,» me parece que salva la dificultad.

Sr. Ministro del Interior—Pero, ¿cuál es el término de duración de esos contratos?

Sr. Berduc—Cualquiera que sea, eso no importa.

Sr. Ministro del Interior—No, señor; porque no sería justo dejar al arbitrio de cada provincia la duración de contratos existentes.

Sr. Rodríguez Jurado—Note el señor ministro que se trata de contratos en vigor, preexistentes.

Sr. Ministro del Interior—Pero pueden ser por términos muy largos, y entonces convendría á la nación y al eficaz cumplimiento de esta ley, que aquí mismo se determinara el tiempo en que han de fenecer esos contratos.

Sr. Rodríguez Jurado—Es que la duración de esas loterías depende, señor ministro, de un contrato bilateral, que esta ley no puede limitar.

Sr. Berduc—Por lo que respecta á Entre Ríos, puedo manifestar que el contrato existente termina el 30 de marzo de 1897. Pero no conozco el término de la de San Luis, ni el de la de Corrientes.

Sr. Ministro del Interior—Yo creo que la cámara debe preocuparse de esto: de la injusticia que se establecería

Octubre 7 de 1895.

CÁMARA DE DIPUTADOS

2ª Sesión de prórroga.

permitiendo que algunas provincias tengan lotería propia, y otras no; y no hay ningún deber de parte del gobierno, porque ese deber va á desaparecer por acción de los mismos interesados. Son los contratistas los que van á pedir á los gobiernos que desaparezca el contrato. ¿Por qué? Porque no podrán vender, prohibida esas loterías en la capital, un solo billete de ellas.

Pero esa injusticia que habría respecto de las provincias, debe ser limitada á un tiempo determinado. Habría, en efecto, previsión en la ley en proceder así, teniendo cierta deferencia para con las provincias que tienen un contrato: para que, mientras dure su lotería, puedan modificar su situación financiera y se pongan en aptitud de atender todos sus gastos. Pero habría imprevisión en no poner término á eso.

Sr. Guñazú—Pido la palabra.

Para dar al señor ministro algunos antecedentes sobre la lotería de San Luis y el contrato que la rige.

El contrato no vence sino dentro de diez ó doce años... No recuerdo exactamente la fecha de él.

Sr. Ministro del Interior—Ya puede la cámara darse cuenta de la gravedad de la resolución de que se trata, cuando una sola provincia tiene contrato por diez años!

Sr. Guñazú—Dígnese escucharme el señor ministro, y entonces podrá formar su juicio más exactamente sobre el particular.

La lotería de San Luis da al gobierno de la provincia 19.000 pesos de renta.

Sr. Ministro del Interior—Mensuales?

Sr. Guñazú—Anuales.

Parte de esa renta está destinada á la instrucción pública, otra parte á la beneficencia pública, y el resto le ha asignado otro uso el gobierno, en el presupuesto según creo. Pero desde el año entrante, según una ley que está tramitándose en la legislatura de San Luis, en virtud de un proyecto presentado por el poder ejecutivo á principios del corriente año legislativo, los 19.000 pesos de la lotería van á ser destinados á la construcción de una casa de gobierno, viniendo así á ser retirados á la beneficencia pública y á la educación común.

Yo creo que la ley que sanciona en este momento el congreso no puede tener suficiente imperio para privar al gobierno de San Luis de que reciba esos fondos y les dé el destino que crea más conveniente, ni para obligarlo á rescindir el contrato, el cual, por otra parte, no existe á título de atender la beneficencia pública, porque la beneficencia pública no la hace ni la va á hacer en San Luis, el gobierno, sino las sociedades especiales á que esta ley se refiere.

Luego, pues, so pretexto de beneficiar á las sociedades de beneficencia de aquella provincia, no puede imponerse al gobierno de ella que sacrifique esa pequeña renta.

Esta es una dificultad que tendría la ley, sancionada en esta forma. Se privaría, como digo, á la provincia ó á la beneficencia pública, en dicha provincia, de este subsidio que se acuerda á las demás.

Yo creo que existiendo un contrato bilateral entre el gobierno de la provincia y los concesionarios, es difícil que cualquiera persona extraña pueda anular ese contrato. Por instancia de la beneficencia pública, podría el patriotismo del gobierno de San Luis inducirlo á que tratara de resolverlo; pero, para resolverlo, tendría que pagar una fuerte indemnización, lo que no podría hacer.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

Señor: parece obvio—y todos los señores diputados que han tenido lotería en su provincia lo saben bien—cuando no hay venta en Buenos Aires de un billete de lotería, no la hay en ninguna parte de la República.

De tal manera que no sucederá lo que dice el señor diputado por San Luis, que aquel gobierno tendrá que pagar una fuerte indemnización. En todo caso, la pagaría el empresario, porque tendría que pedir la rescisión del contrato antes de vencido el término de él, por no poderlo cumplir.

Sr. Guñazú—Tanto mejor!

Sr. Ministro del Interior—No, señor, no es mejor, porque todo el mundo sabe que es necesario que haya igualdad en la repartición de los beneficios, como en los inconvenientes, para que pueda traer esta ley.

El señor diputado dice que en su provincia la lotería produce diecinueve mil pesos, que va á durar diez años, y que se piensa reunir el dinero que produzca para hacer una casa de gobierno, agregando que no puede haber una resolución del congreso que obligue al gobierno á no tener casa de gobierno, á no tener renta y á privarse de sus recursos. ¡Si no hay obligación ninguna!

Esta ley es precisamente de beneficencia nacional. El señor general Mitre, que hacía oposición al proyecto, en el senado, observó que no se le había puesto el nombre «de beneficencia» y entonces se le pusieron los dos nombres: «lotería nacional de beneficencia.» ¿Por qué? Porque por ella cada provincia tiene el derecho de recibir en favor de sus asilos y hospitales, una cantidad de dinero determinada; pero tiene el derecho y no la obligación, señor presidente. De manera que no hay aquí obligación ninguna para el gobierno de San Luis ni para ningún otro, de recibir esos beneficios ó de no recibirlos, de privarse de las loterías locales ó no privarse de ellas: si les conviene, recibirán este subsidio de beneficencia que la nación les da, y entonces retirarán sus loterías; si no les conviene, seguirán con sus loterías, renunciando al subsidio nacional.

Pero no se puede decir que se prive al gobierno de San Luis ni á ningún otro de los recursos con que cuenta. No se les priva de nada! Lo único que harían, sería acogerse á los beneficios que les ofrece esta ley, bajo una condición determinada: la de no tener loterías provinciales.

Yo insistiré, señor presidente, en que se señale un término fijo para esta opción.

Sr. Varela — ¿En qué artículo de la constitución puede fundar esa condición el señor ministro?

Sr. Ministro del Interior — En el derecho común.

Yo no tengo la obligación de regalar nada al señor diputado; pero, si pudiera, le regalaría esta casa del congreso, bajo una condición dada. Si no acepta la condición, no se la regalo. Por su parte, el señor diputado no acepta, si no quiere.

Sr. Varela—Pero el señor ministro no tiene una constitución respecto de mí, como la tiene la nación respecto á las provincias.

Sr. Ministro del Interior—Este es un caso del derecho común.

Si mañana muere un hombre rico, dejando doscientos mil duros á favor del estado, bajo la condición de hacer una casa, y no hace el estado la casa, quiere decir que renuncia á la donación.

Sr. Varela—Pido la palabra.

No había pensado tomar parte en la discusión de este artículo; pero las palabras del señor ministro, que me prueban que cada vez se incurre en mayores inconstitucionalidades, me deciden á hacerlo.

Para la constitución argentina hay una dualidad: el pueblo argentino y los gobiernos de provincia.

Cuando el congreso dicta leyes, las dicta para el pueblo argentino; jamás para los gobiernos de las provincias, que son soberanos dentro de la constitución nacional y en la órbita de las constituciones locales.

De manera que, cuando se habla de beneficencia nacional, se entiende que se habla de *beneficencia para el pueblo argentino*, sin tener en cuenta á los gobiernos, que para nada tienen intervención en estas cosas.

El señor ministro dice que se puede hacer la ley condicional para los gobiernos de provincia, es decir, que la ley puede prescindir del pueblo argentino, para entenderse con los gobiernos de provincia.

No es esto, señor ministro, lo que entiende la constitución, y el ejemplo que nos ha presentado no puede ser aplicado al caso actual: que si yo no aceptase una condición dada, no me regalaría esta casa, no cuadra, absolutamente, á la cuestión en debate.

Nadie estaría obligado respecto de mi persona; pero sí lo está el gobierno nacional respecto del pueblo argentino.

Sr. Ministro del Interior—¿Está obligado, señor, á darle subsidios de beneficencia?

Sr. Varela—Suponga el señor ministro que todas las sociedades de beneficencia de la República sean compuestas de opo-

sitores á los gobiernos de provincia. Entonces, ¿qué quiere el señor ministro? ¿Que los gobiernos de provincia, fundados en esa circunstancia, nieguen el concurso de esos fondos á dichas sociedades; que los acepten ó los renuncien, según su criterio? Eso no es lo que quiere la ley. La ley nacional tiene que regir para el pueblo argentino, haya ó no haya gobiernos de provincia que se opongan á que produzca todos sus beneficios, siempre que la ley haya sido dictada dentro de la órbita de atribuciones que asigna al congreso la constitución nacional.

De manera que la condición establecida por este artículo es inconstitucional y no puede subsistir, porque el cumplimiento de una ley no puede depender, en ningún modo, de la aquiescencia que le preste ó no le preste un gobierno de provincia, siempre que la ley se dé en virtud de las facultades del congreso.

En mi opinión, es inconstitucional. Pero me pongo en el caso de los que creen que es constitucional, y entonces digo: No! esta lotería es para el pueblo argentino, y, por consiguiente, esta obligación, esta condición no puede ser impuesta á los gobiernos de provincia.

Y de ello voy á dar una prueba más todavía.

Si esta ley se refiriera á las provincias en su capacidad de tales, tendría que tener en cuenta la capacidad económica de las mismas. Entre tanto, da lo mismo á la provincia de Buenos Aires—70 ú 80 mil pesos, para las sociedades de beneficencia—que á la de Jujuy ó á la de San Luis, que no pueden tener las mismas necesidades que ésta, ó á la de Córdoba ó á la de Entre Ríos.

Me parece que este artículo es de los más inconstitucionales.

Sr. Ministro del Interior—El señor diputado establece que ninguna ley puede ser condicional. Es un gravísimo error.

No sé cómo no se ha fijado que todos los días vota leyes condicionales.

Hace poco, votó una ley autorizando la construcción de un puerto en Santa Fe, á condición de que la provincia concurre con determinada parte. Si no concurre el gobierno de Santa Fe, el puerto no se hará.

Sr. Varela—Esta es una ley general.

Sr. Ministro del Interior—Insiste el señor diputado en que es ley general. Le citaré la ley de subsidios á la instrucción pública, que interesa á todo el país.

A cada provincia se le da un subsidio de acuerdo con lo que ella invierte, es decir, de acuerdo con sus necesidades.

Exactamente como el señor diputado quisiera que fuese esta ley.

Sr. Varela—Proporcionalmente á su población.

Sr. Ministro del Interior—¿Por qué no lo propone el señor diputado? Sería un artículo á agregar. Pero no puede discutir con motivo de un artículo que la ley no tiene, haciendo observaciones á todo lo que ella dispone.

Las provincias que den tanto para la beneficencia pública, recibirán tanto de la nación. Si dejan su lotería, recibirán la cuota que les corresponda de la nacional.

Es lo mismo que ocurre respecto de la instrucción pública en la compra de libros, útiles para las escuelas, sueldos de los maestros, etc. Y á nadie se le ha ocurrido decir que eso sea inconstitucional.

Por otra parte, el señor diputado establece una dualidad entre las provincias y los gobiernos, y los divorcia; olvida que sus gobiernos las representan, que son ellos lo que tienen su personería jurídica, diremos así.

Por consiguiente, al acordarles el derecho de recibir ó no parte del producto de la lotería, se les deja en libertad de hacer ó no hacer uso de ese derecho, según les convenga.

Si la provincia de Entre Ríos puede autorizar una lotería que le dé 400.000 pesos al año, no se acogerá á los beneficios de esta ley. ¿Y qué derecho habría de prohibirle que jugase esa lotería?

Porque eso tiene de bueno esta ley: es eminentemente nacional; todas las provincias pueden acogerse á sus beneficios. Pero, á mi juicio, no debe dejarse indeterminado el plazo, porque sería en unos casos injusto, y en otros muy peligroso.

Sr. Guíñazú—Pido la palabra.

Estoy de acuerdo con las últimas pala-

bras del señor ministro. En la ley se puede establecer esta cláusula: las provincias se acogerán á los beneficios de esta ley, á condición de no hacer concesiones á empresas de lotería local.

No soy defensor de las loterías locales; no lo sería ni de la lotería nacional, si no estuviera convencido de que es una institución necesaria, sobre todo necesaria por el rol que desempeña en nuestra sociabilidad, en virtud del destino dado por la ley á los fondos que ella produce.

No soy defensor de las loterías locales; y me gustaría que, si ha de haber lotería, haya una sola y que sea la lotería nacional, que es aquella en que se hace contribuir al juego á un fin tan noble como es la caridad pública.

Estamos, pues, casi de acuerdo con el señor ministro; la discrepancia consiste más en las palabras que en los hechos.

Puede suceder, es muy verosímil, que la vigencia de esta ley, en cuanto proscribire del territorio de la capital federal las loterías locales, tenga esta consecuencia: hacer fracasar esas empresas de lotería y obligar á los concesionarios á ocurrir ante los gobiernos ó municipalidades respectivas, á pedir la rescisión del respectivo contrato.

Sr. Ministro del Interior—Ellos lo pedirán: los contratistas.

Sr. Guiñazú—Estoy de acuerdo á ese respecto, decía, con el señor ministro: es posible que esto llegue á suceder, sobre todo si las disposiciones restrictivas de esta ley, en lo que se refiere al expendio de billetes de loterías locales en la capital de la República, se pueden imponer con todo vigor.

Sr. Ministro del Interior—Así se ha de hacer.

Sr. Guiñazú—No lo dudo, señor ministro.

Entonces, pues, la capital de la República, que es el único mercado, y si no el único, el principal mercado de las loterías locales, desaparecerá como tal, y las empresas fracasarán.

Puede ser ésta una consecuencia de una disposición previsoramente de la ley; pero, señor presidente, que la ley venga á coartar, por así decir, el derecho que han ejercitado las municipalidades ó los go-

biernos de provincia, sin tener en consideración la posibilidad de esta ley futura de lotería nacional, para hacer concesiones de loterías locales, y para hacerlas en virtud de una ley-contrato, por un tiempo determinado, es lo que me parece que no es posible, legalmente hablando.

Un contrato bilateral sólo puede ser rescindido por voluntad concurrente de las partes.

Estoy perfectamente de acuerdo con el señor ministro en cuanto él cree que los gobiernos locales, en vista de esta ley, y con el propósito de favorecer á las provincias respectivas, renunciarán á los beneficios que les producen las loterías locales; pero los renunciarán en cuanto les sea posible, en cuanto dependa de ellos mismos y no de las contrapartes, es decir, de los empresarios de lotería.

Sr. Ministro del Interior—Ellos se apresurarán á pedir la rescisión, señor diputado.

Sr. Guiñazú—Perfectamente.

Sería un triunfo de la ley, en la forma que va sancionada hasta ahora; pero imponer que se limite el tiempo de los contratos, me parece que no se puede hacer.

Sr. Ministro del Interior—No de los contratos, señor diputado; de la ley. Los contratos van por su orden separado, y los contratistas sabrán si les conviene seguir ó no.

Sr. Guiñazú—Sí, señor ministro; pero si no rescinden los contratos respectivos, las provincias no recibirán los beneficios de esta ley.

Sr. Ministro del Interior—Evidentemente.

Sr. Guiñazú—Bien: yo me pongo en el caso de un gobierno que necesite disponer de la pequeña renta que le da la lotería local; que necesite disponer de ella para fines extraños á la beneficencia pública, como es el caso que he citado. Puede suceder, es lógico suponer, que esos gobiernos, inspirados por un sentimiento de patriotismo, hagan lo que sea posible, dentro de la legalidad, para ayudar á la beneficencia de sus provincias con los recursos de la lotería nacional, renunciando al pequeño beneficio fiscal de la lotería local; pero si esto puede su-

Octubre 7 de 1895.

CÁMARA DE DIPUTADOS

2ª Sesión de prórroga.

ceder, también puede suceder lo contrario; esto es, que el gobierno de la provincia *A* ó *B* necesite de ese pequeño recurso y no esté dispuesto á hacer renuncia de él.

Quiere decir que si se sanciona la ley en esa forma, la terquedad de un gobernante que no quisiera renunciar á tres, quince ó veinte mil pesos, haría perder á la beneficencia local la renta, mucho más crecida, que le daría esta lotería nacional.

Sr. Ministro del Interior—No ha de haber gobernantes tan tercos, señor diputado.

Sr. Guñazú—Puede suceder, señor. Está en lo humano.

Sr. Ministro del Interior—No; precisamente, en lo humano está todo lo contrario.

Sr. Guñazú—Por otra parte, voy á hacer presente al señor ministro esta otra circunstancia.

La condición que establece la ley es muy aleatoria: acuerda los beneficios de la lotería á la beneficencia pública de una provincia si su gobierno, que es una personalidad completamente distinta de las sociedades de beneficencia, renuncia á todo otro beneficio, á toda otra renta.

Rogaría al señor ministro del interior que no fuera tan riguroso en la aplicación de estas reglas de equidad.

La equidad es amplia, es elástica por su esencia, por su naturaleza; no es tan rigurosa como el derecho estricto.

No se perjudica la lotería nacional, no se perjudica la beneficencia nacional, no se perjudica el gobierno con establecer en la ley una cláusula que reconozca, por el tiempo de vigencia, esos contratos, y que sólo ponga esta cortapisa (indirectamente, porque no se puede imponer esa medida á los gobiernos de provincia) estableciendo, como lo propone el señor diputado por Entre Ríos: no gozarán los beneficios de esta lotería las provincias que en adelante concedan loterías ó prorroguen los contratos existentes.

El señor ministro del interior no puede tener inconveniente de ningún género para ser deferente en favor de tres ó cuatro provincias pobres, por si no

pueden rescindir los contratos que hoy tienen; creo que á los gobiernos respectivos los ha de animar la mejor buena voluntad en ese sentido.

Es simplemente una cuestión de equidad.

Sr. Berduc—Se podría votar

Sr. Avellaneda—Pido la palabra.

Yo encuentro justo lo que propone el señor ministro del interior: un límite, desde el cual las provincias que continuaran permitiendo la extracción de loterías quedarán privadas de los beneficios de esta ley.

Pero se me ocurre este inconveniente: según los informes que yo tengo, algunas de las provincias reciben una cantidad muy insignificante por las loterías que tienen acordadas. Me parece que se me ha dicho que la provincia de Jujuy sólo recibe la cantidad de 250 pesos mensuales, lo que serían 3.000 pesos al año.

Sr. Varela—Será de la lotería de Buenos Aires.

Sr. Avellaneda—Entonces, pues, á los contratistas podría convenirles continuar jugando, durante el término que se estableciera en esta ley, á pura pérdida, pagando, sin obtener nada, los 3.000 pesos que tienen obligación de entregar á la provincia de Jujuy, para, después de tres ó cuatro años, cuando llegue el término impuesto por la ley, exigir una cantidad crecida—sesenta, ochenta ó cien mil pesos—que se vería en la obligación de entregarles la provincia de Jujuy, bajo pena de privarse de los beneficios de la lotería.

Yo no sé cómo podría salvarse este inconveniente, que es muy grave.

Sr. Berduc—Cualquier puerta que se deje abierta será mala.

Sr. Claros—Yo creo que la provincia de Jujuy no ha de tener inconveniente alguno para dar cumplimiento á esta ley.

Por otra parte, ha de hacer todo lo posible para rescindir el contrato.

Sr. Ministro del Interior—Se podría establecer lo siguiente en la ley.

Parece que las provincias que más interés tienen en la continuación, por algún tiempo, de las loterías provinciales (que yo creo que la cámara haría bien en limitar) son las de Entre Ríos y San Luis.

Podría decirse, respecto de ellas: tal tiempo. Y nada más: dejar las leyes en sus términos generales.

Sr. Presidente—Si no se pide la votación del proyecto primitivo de la comisión, se votará en los términos que ha propuesto el señor diputado.

Sr. del Campillo—Que se vote el artículo de la comisión, y luego la proposición del señor diputado.

Sr. Presidente—Por eso decía que si no se pedía.....

Sr. del Campillo—No hay necesidad de que se pida, porque es la forma que establece el reglamento.

Sr. Presidente—Perfectamente.

Sr. Guñazú—Pero la comisión ha aceptado la modificación.

Sr. Presidente—Pero hay un señor diputado que, con derecho, pide que se vote el despacho de la comisión.

Sr. Guñazú—Yo quería saber eso para votar; porque, si la comisión acepta la modificación, yo votaré por el artículo

—Se vota el artículo de la comisión, y es rechazado por 34 votos contra 16, aprobándose en esta forma:

«Las provincias que por medio de sus legislaturas ó municipalidades autoricen nuevas loterías ó prorroguen los contratos existentes, quedarán excluidos de los beneficios de esta ley,» por 25 votos contra 24.

—A pedido del señor diputado Solari se rectifica la votación y da el mismo resultado.

—Se aprueba los demás artículos del despacho.

Sr. Varela—Pido la palabra.

Señor: todas las leyes de impuestos que tiene la República, y todas las que importan acordar fondos para cualquier objeto, se votan anualmente.

A esta ley se le ha llamado «contribución voluntaria»; yo la he llamado «drenaje del ahorro público». Porque han de saber los señores diputados que por ella no menos de 8 á 10.000.000 de pesos al año vienen del interior de la República á la ciudad de Buenos Aires. Hay que pagar íntegros los 30.000.000 que se juegan aquí, en la capital.

Entonces, siendo una cuestión tan seria, pido que se aplique á esta ley el artículo que contienen todas las leyes de im-

puestos: «Esta ley regirá hasta el 31 de diciembre de 1896.»

El congreso, el año que viene, la votará de nuevo, si lo cree conveniente.

Sr. Presidente—¿Está apoyado?

Varios señores diputados—Apoyado.

Sr. Cantón—Yo la apoyo para votar en contra.

Sr. Avellaneda—No se puede aceptar. ¿Cómo se va á considerar una ley de lotería como ley de impuesto!

Sr. Varela—Pero lo que propongo tiene esta importancia: todas las leyes que afectan la economía social, en cualquier forma, deben caer bajo la discusión del congreso anualmente.

No cerremos la puerta al congreso del año que viene, para que prorrogue esta ley ó la amplíe si quiere; por lo menos, que haya la obligación de que se discuta nuevamente.

Sr. Rodríguez Jurado—¿El presupuesto de la administración de la lotería, dice el señor diputado?

Sr. Varela—La ley; toda la ley.

Sr. Avellaneda—Esa cláusula sólo la tienen el presupuesto y las leyes de impuestos.

Sr. Presidente—El señor diputado tiene el derecho de hacer la proposición.

Sr. Varela—Un diario de esta capital se ha tomado la molestia de facilitarme la tarea de definir bien lo que esto significa. No quiero repetir sus palabras, y tomo la definición que la comisión le ha dado: «contribución voluntaria», y como ley de contribución propongo que, como las demás, se vote anualmente.

Sr. Avellaneda—La comisión no le ha dado tal calificativo.

Sr. Varela—¿Cree el señor diputado que incluyendo este artículo en la ley el congreso no se ocuparía de ella el año que viene?

Precisamente, lo que yo busco es que, si no se ocupa de ella, no haya ley el año 1897, y se salve así el ahorro de la República!

Sr. Ceretti—Pido la palabra.

Yo voy á votar en contra, porque las premisas que ha sentado el señor diputado, para hacer la moción, son completamente equivocadas.

La constitución no establece la obligación de que las leyes de impuesto se re-

visen anualmente. Puede tener razón el señor diputado para pedir que esta ley se revise todos los años, pero no debe fundarse en ningún artículo de la constitución. Ninguna de las leyes de impuestos vigentes impone la obligación al congreso de hacer su revisión anual. Sólo con la de presupuesto ocurre esto....

Sr. Varela—¿Quiere leer el señor secretario los artículos finales de todas las leyes de impuesto?.... Cualquiera de ellas puede leer; de esas leyes que ha firmado el señor diputado Ceretti, como miembro de la comisión de presupuesto.

Sr. Secretario Ovando—Dice la ley de impuesto territorial: «La presente ley regirá durante el año 1895».

Sr. Varela—¿No ha oído el señor diputado?

Sr. Ceretti—No; estaba oyendo una conversación.

Sr. Varela—Puede volverse á leer.

—Se lee nuevamente.

Sr. Ceretti—Pero eso no es una disposición constitucional; y en la constitución se ha fundado el señor diputado para hacer su indicación. Por eso yo le dije. Podrá tener otras razones el señor diputado para fundar el artículo que propone, pero de ninguna manera puede apoyarlo en prescripción constitucional.

Sr. Varela—Lea el señor secretario el artículo 67 de la constitución, para que no lo eche en olvido mi honorable colega. Así lo sabrá....

Sr. Presidente—No se necesita....

Sr. Varela—No lo lea.

Sres. Ceretti y del Valle—Que se lea.

Sr. Varela—Bueno; que se lea. (*Risas*).

Sr. Guñazú—Creo que no está en discusión el artículo de la constitución. Que se vote.

Sr. Presidente—Pero hay que satisfacer el pedido de los señores diputados.

—Se lee el artículo 67 de la constitución, inciso 7º: «Fijar anualmente el presupuesto de gastos de la administración de la nación y aprobar ó desechar la cuenta de inversión.»

Sr. Presidente—Conocida es ya la prescripción constitucional.

Sr. Varela—Yo me limito á esto: á que el señor diputado busque en cualquier

diccionario de la lengua española lo que quiere decir *presupuesto*.

Sr. Ceretti—Apóyese en eso! (*Risas*) y que conste que el señor diputado se apoya en el diccionario de la lengua....

Sr. Presidente—¡No se puede continuar la discusión en esta forma!

Sr. Varela—El señor diputado por Mendoza ha leído demasiado ligero la constitución.

Sr. Presidente—¡Pero será culpa de él, señor! (*Risas*).

Varios señores diputados—Que se vote.

Sr. Varela—«Fijar anualmente» dice la constitución, «el presupuesto de gastos de la administración de la nación, y aprobar ó desechar la cuenta de inversión.»

Por presupuesto de la administración, señor presidente, se entiende el gasto y los recursos con que ha de pagarse el gasto. La ley de contabilidad, que el señor diputado también ha olvidado, establece igual cosa, y en este país eso se ha votado siempre anualmente.

—Se rechaza la moción en discusión.

Sr. Presidente—Queda sancionado el proyecto relativo á la lotería.

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION CON EL REINO DE SUECIA Y NORUEGA

Sr. Secretario Ovando—En el orden de los despachos de comisión sobre asuntos incluidos en la prórroga corresponde el turno al tratado de amistad, comercio y navegación con el reino de Suecia y Noruega.

Sr. Demaría—Pido la palabra.

Hago moción de aplazamiento de ese asunto hasta las sesiones del año próximo.

—Apoyado.

Sr. Balaguer—Pido la palabra.

Yo me voy á oponer á que se aplaze este asunto, porque hace más de 23 años que el gobierno de Suecia y Noruega viene insistiendo en la celebración de este tratado. Se han hecho diversas gestiones en el ministerio de relaciones exterior.